Proceso: Acción popular
Accionante: Mario Restrepo
Accionado: Droguería Medifarma J.P
Interlocutorio No. 110

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 10 de abril de 2023

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que a través de correo electrónico el actor popular presenta “*reposición y en subsidio apelo*”, se prescinde del traslado, en razón a que no se ha notificado a la entidad accionada.

A despacho para los fines legales pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Rad. 2023-00064-00
Riosucio, Caldas, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)**

OBJETO DE DECISIÓN:

Procede el despacho a resolver el recurso “*reposición y en subsidio apelo*” presentado por el actor popular frente auto que rechaza la demanda el 24 de marzo de 2023.

ANTECEDENTES:

Mediante auto del 16 de marzo de 2023, este despacho inadmitió la demanda en razón a que el actor popular no había demostrado el cumplimiento del artículo 6 de la ley 2213 de 2022.

Con el escrito presentado por el actor popular no se cumplió las condiciones de inadmisión, por ende, mediante auto del 24 de marzo del año en curso se rechazó la demanda.

ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES:

Proceso: Acción popular
Accionante: Mario Restrepo
Accionado: Droguería Medifarma J.P
Interlocutorio No. 110

El actor popular indica “*reposición y en subsidio apelo el auto de rechazo que TERMINA DE FORMA ANORMAL EL TRAMITE CONSTITUCIONAL IMPIDIENDO LA SENTENCIA DE MERITO PIDO DE TRAMITE A MI ACCION PUES CUMPLO ART 18 LEY 472 DE 1998 COMPARTA EL LINK DE LA ACCIÓN POPULAR*” Sic.

CONSIDERACIONES:

Como aspectos generales a resolver el recurso que antecede, debe indicarse que, conforme lo dispone el artículo 36 de la ley 472 de 1998 en las acciones populares solo proceden el recurso de reposición frente a los autos que se dictan durante el trámite de las acciones populares, por ende, en concordancia con el párrafo del artículo 318 del C.G.P.

Visto, así las cosas, respecto del recurso impetrado por el actor popular, como lo indica el doctrinante Hernán Fabio López Blanco en su obra parte general del Código General del Proceso pág., 769 “*No debe, entonces, confundirse el concepto de viabilidad con el del éxito del recurso. El primero es presupuesto necesario del segundo, pero no implica que de cumplirse se presentará una decisión favorable, porque bien puede acontecer que se mantenga la providencia impugnada. En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás podrá tener éxito el mismo por constituir el lleno de ellos un precedente necesario para decidirlo porque, para citar un ejemplo, si interpongo el recurso por fuera del plazo previsto en la ley, jamás será posible el análisis del mismo. Si lo hago y se reúnen los restantes requisitos se debe llegar a la decisión de fondo pertinente, pero eso no asegura que vaya a tener éxito la impugnación*”.

i) La capacidad para interponer el recurso dentro de este requisito se encuentra tres aspectos, quien interponga el recurso sea persona habilitada por la ley para hacerlo por estar asistido del derecho de postulación, por regla general los abogados y no a las partes, el otro aspecto, cuando la ley restringe expresamente la posibilidad del recurso, y el último, cuando las personas que intervienen en el proceso tienen solo capacidad restringida para interponer recursos **ii) El interés para recurrir** lo tiene la persona perjudicada con la providencia, de manera que si acoge íntegramente las peticiones de una de las partes, esta carecería de ese interés. Por consiguiente, si la providencia no ocasiona un perjuicio material o moral a una de las personas habilitadas para recurrir, no tendrá capacidad para interponer el recurso **iii) La oportunidad del recurso** requisito indispensable, debe presentarse en la oportunidad señalada por la ley para hacerlo, si no se interpone dentro de los límites precisos, precluye la oportunidad y el juez debe negar su tramitación **iv) La procedencia del recurso** el legislador señala como adecuados ciertos recursos, de modo que al momento de interponerse debe tenerse sumo cuidado del recurso a utilizar **v) La motivación del recurso** todos los recursos deben ser motivados, es decir, no basta el deseo de la parte de recurrir de una determinada providencia, sino que debe indicar el porqué de su inconformidad debidamente fundamentada.

Proceso: Acción popular
Accionante: Mario Restrepo
Accionado: Droguería Medifarma J.P
Interlocutorio No. 110

Así las cosas, evidencia esta célula judicial que el actor popular presenta mediante correo electrónico recurso “*reposición y en subsidio apelo*” y expone unos argumentos sumarios.

Ha de indicarse que, en la providencia del 16 de marzo del año en curso se le indico claramente el motivo por el cual se inadmitía la demanda, además que se le puso de presente que la ley 2213 de 2022 es aplicable en la Jurisdicción Constitucional, y, por ende, no puede ni esta judicatura ni las partes hacer caso omiso a dichos requerimientos.

Claramente el artículo 6 de la ley 2213 de 2022, dispone que, al momento de presentarse una demanda, en este caso, la acción popular, la misma debe enviarse simultáneamente a la parte demandada, cuando se conoce el canal digital como en el presente asunto, pues el mismo actor popular es quien refiere el correo electrónico de la entidad accionada.

De igual manera, se rechaza por improcedente el recurso de apelación impetrado, pues se reitera, las decisiones adoptadas al interior de las acciones populares solo proceden los recursos de reposición.

Por lo expuesto, el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO** de Riosucio (Caldas)

RESUELVE:

PRIMERO: No reponer la decisión adoptada el auto del 24 de marzo de 2023, dentro de la acción popular promovida por el señor **Mario Restrepo** en contra de **Droguería Medifarma J.P**, por lo expuesto en el cuerpo de esta providencia.

SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado por el actor popular.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño

Proceso: Acción popular
Accionante: Mario Restrepo
Accionado: Droguería Medifarma J.P
Interlocutorio No. 110

Juez(a)
Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7e20bbee3633339a7f8a3063db7a372c78773b483b6fb15c01fe5079aff5f9be

Documento firmado electrónicamente en 10-04-2023

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx>

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO

Riosucio Caldas

177774089001-2023-00078-01
Diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023).

1. OBJETO DE LA DECISIÓN:

Procede este despacho a decidir sobre la impugnación del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Supía, Caldas, el 06 de marzo de 2023, en la acción de tutela instaurada por el señor **German Antonio Lengua Motato**, accionadas **la Alcaldía Municipal de Supía, Caldas y su Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos** siendo vinculados la señora **María Olga Ramírez de Gutiérrez y Leonardo Cardona Toro**.

2. ANTECEDENTES

En el escrito de tutela la accionante solicitó que se *“salvuarde el derecho fundamental al debido proceso administrativo y a la propiedad privada, y en ese sentido, se ordene a la ALCALDÍA DE SUPÍA CALDAS Y SU SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS revocar la decisión del 11 de octubre de 2022 por medio de la cual declaro al señor GERMAN ANTONIO LENGUA MOTATO como perturbador y de esta forma cesar la vulneración de derechos fundamentales”*.

La presente acción constitucional fue admitida el 23 de febrero del año 2023, ordenándose notificar los accionados y vinculando a los señores **María Olga Ramírez de Gutiérrez y Leonardo Cardona Toro**, además decreto la medida previa solicitada con el escrito de tutela.

Como anexo de la tutela se observan 272 folios que se componen del tramite adelantado en la Inspección de Policía.

Obra respuesta a la tutela ofrecida por la señora María Olga Ramírez a través de su apoderado judicial, y del Municipio de Supía, Caldas.

3. CONSIDERACIONES

La Corte Constitucional ha señalado que los procesos de tutela *“pueden adolecer de vicios que afectan su validez, situación que ocurre cuando el juez omite velar por el respeto al debido proceso de las partes e intervinientes del procedimiento. Ese deber es exigible al juez constitucional, en la medida que este se encuentra*

vinculado a los principios de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y a la economía procesal.”¹

Esta Corporación ha indicado que *“las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso”².*

De igual manera, la Corte ha precisado que las nulidades en los trámites de tutela pueden presentarse antes y después del fallo proferido por parte de la Corte Constitucional en sede de revisión³. Ello advierte dos momentos procesales diferentes en donde la autoridad judicial competente puede incurrir en acciones u omisiones que desconozcan el derecho al debido proceso de una de las partes o de los terceros interesados en el caso. El inciso 2º del artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, *“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”*, permite que las partes y los terceros intervinientes aleguen la nulidad del proceso antes de la expedición del fallo, hipótesis que se activa cuando se produce una violación al derecho al debido proceso. En su jurisprudencia, la Corte⁴ ha prohijado esa norma y adicionado otro contenido de derecho de construcción jurisprudencial, el cual faculta para formular la nulidad de la providencia que pone fin al proceso después de su expedición, siempre y cuando la nulidad se derive de manera directa de la sentencia.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que los contenidos del artículo 29 de la Constitución son estándares relevantes para analizar los yerros acaecidos en los trámites de tutela, que quebrantan el derecho al debido proceso⁵.

La Sala de la Corte han acudido a los estatutos procesales generales para identificar las irregularidades del procedimiento que desconocen el derecho al debido proceso de las partes o interesados, en razón de la ausencia de regulación detallada en tutela y a la remisión normativa a ese tipo de códigos⁶. En consecuencia, se ha manifestado que *“se aplicará en lo pertinente el Código de Procedimiento Civil –hoy Código General del Proceso-, de conformidad con la remisión que efectúa el artículo 4º del Decreto Reglamentario 306 de 1992”⁷.* Dicha disposición normativa prevé: *“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo*

¹ Sentencia T-661 de 2014.

² Providencia T-125 de 2010, reiterada en el Fallo T-661 de 2014.

³ Sentencia SU-627 de 2015.

⁴ Autos A-288ª de 2016, A-056 de 2016, A-034 de 2013, A-023 de 2012, A-019 de 2011 y A-026 de 2010.

⁵ Autos A-205 de 2017, A-073 de 2017 y A-604 de 2016.

⁶ Sentencia T-661 de 2014 y Sentencia T-125 de 2010. En el mismo sentido, ver los Autos A-202 de 2017, A-121 de 2017, A-002 de 2017, A-554 de 2016, A-313 de 2016, A-304 de 2015, A-014 de 1997 A-002 de 1994, A-003 de 1994 y A-007 de 1994.

⁷ Sentencia T-661 de 2014.

aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto (...)".

La Corte Constitucional ha considerado que el desconocimiento de las reglas procesales fijadas en los Decretos 2591 y 2067 de 1991 también pueden constituir parámetros válidos para evaluar la legalidad del trámite de tutela, por lo que son insumos que permiten identificar si se ha presentado la violación del derecho al debido proceso en esos juicios⁸.

Con base en ese marco jurídico, las diversas Salas de Revisión han evaluado si en los trámites de tutela se han producido vulneraciones al derecho al debido proceso de las partes o interesados, al incurrir en una de las causales de nulidad señaladas en el Estatuto Procesal General, o desconocer las normas de trámite de los Decretos 2591 y 2067 de 1991 así como los contenidos sustantivos del artículo 29 de la Constitución. En algunos eventos, han declarado la nulidad del procedimiento y retrotraído la actuación al momento anterior del vicio que afectó la validez del trámite⁹. En otros eventos, han subsanado dicho yerro, conforme al procedimiento que indica el estatuto procesal¹⁰, o han inaplicado tal normatividad para adoptar una decisión y proteger los derechos fundamentales del afectado¹¹.

Por ende, la misma debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión, en este sentido, se tiene que el juez constitucional sustenta su decisión en el proceso de restitución de bien inmueble radicado 17777408900120200025800 adelantado por la señora María Olga Ramírez de Gutiérrez en contra del señor Luis Gustavo Vargas Vélez, y en el cual, se reconoció como poseedor al señor German Antonio Lengua Motato de los lotes denominados La María y el Recreo, proceso que no fue decretado como prueba e incorporado al expediente digital de la acción constitucional.

Claramente en el discurrir de la decisión objeto de impugnación, el juez constitucional basado en el conocimiento primario de dicho proceso de restitución del bien inmueble considero la vulneración del trámite adelantado en la Inspección de Policía, no obstante, a ello, el mismo no fue decretado ni incorporado como prueba al plenario, a fin de que en este caso las entidades **Alcaldía Municipal de Supía, Caldas y su Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos** conocieran el fundamento principal del A-Quo para tutelar el derecho fundamental al debido proceso administrativo del señor German Antonio, y en el mismo sentido, fuera estudiado en segunda instancia para determinar si efectivamente se dio la vulneración o no de la decisión emitida en la querrela.

Como punto de partida, resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudencial y

⁸ Auto 032 de 2002.

⁹ Autos A-202 de 2017, A-002 de 2017, A-295 de 2014, 363 de 2014, A-271^a de 2011, A-381 de 2008, A-084 de 2008, A-156 de 2006, A-267 de 2001 y A-033 de 2000.

¹⁰ Autos A-267 de 2017, A-071 de 2016, A-536 de 2015, A-065 de 2013, A-113 de 2012, A-025A de 2012, A-165 de 2011, A-288 de 2009, A-002 de 2005 y A-091 de 2002.

¹¹ Sentencia T-661 de 2014.

procedimentales, de manera tal que no puede el juez de instancia basar su sentencia en el conocimiento del trámite adelantado al interior del proceso de restitución de bien inmueble, cuando el mismo no figura en las diligencias objeto de estudio y únicamente es conocido por el juez constitucional y los querellantes.

En este sentido, tenemos que la Corte ha explicado también las deficiencias probatorias que se pueden generar al interior de un trámite, entre estos, figura la omisión judicial al momento de decretar o practicar pruebas conducentes al caso debatido, como se itera sucede en las diligencias, pues si bien el A-quo refiere que obra en el expediente de tutela la decisión proferida en el proceso radicado 17777408900120200025800, también menciona que allí a través de un trámite incidental le reconoció la posesión al señor German Antonio Lengua Motato de los lotes denominados La María y el Recreo., y por ende, concluye en que existe cosa juzgada.

Adicional a ello, el A-quo refiere que, en la Resolución No. 2021-11-30-01 del 30 de noviembre de 2022 se omitió emitir auto que ordenara pruebas o rechazaba algunas de ellas por carecer de pertinencia, conducencia y utilidad, no obstante a ello, al revisar los anexos allegados con la acción constitucional se tiene que a folio 147 obra auto 01-12-2021 incorporación de pruebas a solicitud de parte, mediante el cual se ordenan pruebas documentales y testimoniales, no obstante a ello, se desconoce lo ocurrido con las pruebas testimoniales, pues el expediente de la inspección se encuentra incompleto.

En este orden de ideas, a fin de resolver la acción constitucional encuentra esta judicatura la necesidad de contar con el expediente de la inspección de manera completo y cronológico remitido por la entidad accionada, así mismo, se requiere el decreto de la prueba documental y la incorporación al expediente para que obre como prueba el proceso radicado 17777408900120200025800 adelantado por la señora María Olga Ramírez de Gutiérrez en contra del señor Luis Gustavo Vargas Vélez en el Juzgado Promiscuo Municipal de Supía, Caldas, por ende, este despacho, declarará la nulidad de la sentencia, ordenándose que se agreguen dichas piezas en debida forma y posterior a ello, se adopte nuevamente la decisión.

En razón de lo expuesto y de conformidad lo dispuesto en los incisos 2° y 3° del artículo 138 del C. G. del P., sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovación de la actuación, se invalidará exclusivamente el fallo de primera instancia, por cuanto es la única actuación procesal que puede calificarse como *"(...) posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este"*, lo cual supone la conservación de la eficacia de los demás sucesos previos, y de toda la prueba, en los términos de la norma en cita.

Por tanto, para la reanudación del trámite el a quo deberá agregar en debida forma el expediente adelantado por la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, así como el expediente digital radicado 17777408900120200025800 que se tramitó en el mismo despacho judicial y proceder a decidir de fondo el presente asunto.

Por lo expuesto, el **JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO, CALDAS,**

RESUELVE:

Primero: DECLARAR la nulidad de la sentencia de fecha **06 de marzo de 2023**, proferido en la acción de tutela interpuesta por el señor **German Antonio Lengua Motato**, accionadas **la Alcaldía Municipal de Supía, Caldas y su Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos** siendo vinculados la señora **María Olga Ramírez de Gutiérrez y Leonardo Cardona Toro.**, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

Segundo: DEVOLVER el expediente al juzgado de conocimiento para que rehaga la actuación, conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c746e324647a2c4880ebde2368f843365afe4827b2fbf5c7a4829dbc746bc821**

Documento generado en 10/04/2023 02:23:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Proceso: Acción de Nulidad
Demandante: Gustavo Antonio Colorado y otros
Demandado: John Frey Durando Taborda y otros
Interlocutorio N° 109

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 10 de abril de 2023

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que, en tiempo oportuno la parte demandante se pronunció respecto del traslado del recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por el codemandado Organización Campesina de Riosucio, Caldas.

A despacho para los fines legales que considere pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Rad. 2021-00067-00**

Riosucio, Caldas, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

OBJETO DE LA DECISIÓN:

Procede el despacho a resolver el recurso de reposición presentado en contra del auto de fecha 15 de febrero del año en curso, y que negó la excepción de *“Inexistencia del demandante y no haberse presentado prueba de la calidad en que actúan los demandantes”* propuesta por la parte demandada, dentro del proceso verbal de mayor cuantía de Nulidad de Escrituras de Compraventa promovido por Sabarain Cruz Bañol y Gustavo Antonio Colorado Corrales.

II. ANTECEDENTES:

2.1. Mediante auto del 11 de octubre del año en curso, se emitió auto de obediencia de lo decidido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala Civil-Familia, quienes, en decisión del 30 de septiembre de 2022, declaró la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021.

2.2. A raíz de dicha decisión, se ordenó integrar el contradictorio con la Organización Campesina de Riosucio, Caldas y el señor Juan Bernardo Velasco Trejos, una vez notificados, la primera de estas propuso en escrito a parte excepciones previas.

2.3. De la cual se corrió traslado y en tiempo oportuno la parte demandante se pronunció.

2.4. Mediante auto del 15 de febrero de 2023 se resolvió la excepción previa propuesta, decisión frente a la cual la parte codemandada presentó recurso de reposición en subsidio de apelación.

2.5. Se corrió traslado a la parte demandante y en tiempo oportuno se pronunció.

ARGUMENTOS DEL RECURSO:

Argumenta que la decisión desconoce el orden legal y constitucional, y pareciera que no se enmarca dentro del conocimiento del derecho, remitiéndonos entonces a pensar que esta decisión además de no encontrarse ajustada a derecho, ha sido adelantada por alguien distinto a la Honorable Juez, se adelanta un análisis somero del fenómeno de la prescripción, indica que el despacho olvida que se

requiere ser socio para presentar la demanda refiriéndose a una normatividad que olvida mencionar.

Indica preocupación al no existir prueba siquiera sumaria del demandante, ante un caso que debe analizarse el valor de la venta, valor de pretensiones, mejoras, dinero entregado a los socios, y, por ende, observa una aberración para un caso tan delicado como es el despojo o expropiación a los compradores de buena fe.

Además, indica “todo lo anterior me hace pensar que hay una relación especial con los demandantes, no se les exige pruebas, no tienen que ser socios, la juez puede declarar la nulidad absoluta de oficio, todo a su favor, sin darle valor probatorio a las presentadas en la contestación de la demanda”, por ende, solicita se revise la decisión. También refiere, “todos buscan justicia, y tienen su esperanza viva puesta en la Rama Judicial como ejemplo de Dar a cada quien lo que le corresponde por derecho, fundado siempre en la prueba, y no suposiciones o intereses derivados de triquiñuelas y mentiras”,

Indica que se recuerda que es necesario que se aclare el desdibujo que los demandantes han presentado y la falta de pruebas para probar lo pretendido, y que clase de reclamo hacen los demandantes en este juicio, y en calidad de qué., por tratarse de una propiedad privada o no del Estado, además refiere sentencias de la sana crítica, y solicita hacer una valoración probatoria.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL TRASLADO:

Menciona el apoderado de la parte demandante, se observa un trato indecoroso por parte de la apoderada judicial al hacer señalamientos atrevidos, irrespetuosos y temerarios contra la señora de primera instancia, poniendo en tela de juicio la decisión.

Con toda esta serie de falencias defensivas y argumentaciones que no encuadran en el estanco procesal en el que nos encontramos, solicita no reponer las decisiones y requerir a dicha apoderada para en sus escritos observe las normas procesales que imponen el respeto hacia los operadores judiciales.

CONSIDERACIONES:

Se tiene que, el escrito presentado por la apoderada judicial de la Organización Campesina de Riosucio, Caldas., se compone de 33 páginas, no obstante, a ello, la mayoría de los argumentos allí expuestos se circunscriben juicios emitidos por la apoderada judicial relacionados con aspectos, probatorios, disciplinarios, penales, debido proceso, administración de justicia, idoneidad profesional del equipo en el que se apoya el despacho, decisiones adoptadas por el despacho, acusaciones a la juez anterior y empleados y demás aspectos que no van

encaminados a fundamentar las razones de peso para la declaratoria de la excepción previa solicitada.

En este sentido, se le advierte a la apoderada judicial de la parte actora, que deberá tener altísimo cuidado al momento de establecer los argumentos en los escritos que presente al juzgado, ello, conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 78 del Código General del Proceso, que establece "**Deberes de las partes y sus apoderados: 4. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia**". Pues claramente el memorial viene acompañado de manifestaciones y especulaciones fuera del debate legal por las resultas de la excepción presentada, apreciaciones subjetivas de las cuales no se detendrá esta judicatura a realizar disertaciones.

No obstante, a lo anterior, esta célula judicial tendrá en cuenta los vagos motivos de inconformidad sobre la negación de decretar la excepción previa denominada "**Inexistencia del demandante**" dado que la otra excepción referenciada, no fue objeto de estudio por no contar con argumentos al momento de plantearse las mismas, y de la cual tampoco se avizora inconformismo para ser analizado en esta providencia.

La nulidad en el Código Civil Colombiano

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1740 del Código Civil "*Es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa*".

La nulidad, según la doctrina prevalente, constituye un castigo o sanción civil que se impone por la omisión de los requisitos que la ley considera indispensables para la validez de los actos o contratos. La nulidad se identifica con la invalidez del acto o contrato.

La nulidad puede ser absoluta o relativa. La primera se dirige a proteger el interés público o general de la sociedad, pues está destinada a castigar lo ilícito, es decir, lo contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. La segunda protege el interés privado o particular. Sin embargo, es posible encontrar casos en los que los dos intereses -privado y público- se encuentran comprometidos, vr.gr. cuando se trata de la defensa de los incapaces.

Causales de nulidad

Las causales que dan origen a la nulidad se encuentran descritas en el artículo 1741 del Código Civil, así:

"La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

así mismo hay nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato."

La nulidad absoluta se produce entonces, cuando existe: 1. objeto ilícito, 2. causa ilícita, 3. falta de solemnidades o requisitos esenciales para la validez del acto o contrato de acuerdo con su naturaleza, y 4. incapacidad absoluta. La nulidad relativa, por causas distintas a éstas.

Quiénes pueden solicitar la nulidad

De acuerdo con el artículo 1742 del Código Civil, la nulidad absoluta puede solicitarla **cualquier persona que tenga algún interés legítimo** y el Ministerio Público, en este último caso, únicamente en aras de proteger la moral y la ley. No obstante, la nulidad también **debe ser declarada de oficio por el juez del conocimiento**, cuando *"aparezca de manifiesto"* en el acto o contrato, esto es, cuando es ostensible, notoria o evidente. Lo cual va ligado a la prescripción, figura que este despacho no estudiará por no ser el momento procesal oportuno para ello.

En este sentido, para esta célula judicial existe un interés legítimo de los demandantes para instaurar este proceso, pues como se advirtió en la decisión recurrida los señores Gustavo Antonio Colorado Corrales y Sabarain Cruz Bañol pertenecieron a la Asociación de Usuario Campesinos del Municipio de Riosucio, Caldas., y el inmueble objeto de litigio perteneció a dicha sociedad, por ende, los mismos se encuentran facultados para instaurar la presente acción.

Adicional a ello, si bien la misma también puede ser declarada de oficio como bien lo dispone la norma en comento, esto será objeto de análisis al momento de valor las probanzas arrojadas al expediente por las partes y no de manera prematura como lo pretende ver la parte actora, pues en la decisión recurrida en ninguno de sus apartes se indicó el sentido del fallo, si no, simplemente se dispuso lo que en derecho considera esta judicatura sobre la existencia de los demandantes.

La doctrina al ocuparse de esta excepción previa, expone que los eventos que pueden dar lugar a ella son: a) la inexistencia de la persona jurídica de derecho privado o público; b) se acredita su existencia con un documento falso o que no corresponde a la entidad; c) se demande a una persona natural que ha fallecido; o

a quien no esté autorizado en la ley para ser parte, como por ejemplo, los establecimientos de comercio, que son solo bienes mercantiles.

El concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde el punto de vista puramente procesal o teniendo en cuenta el derecho material en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el proceso como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una pretensión procesal, independientemente de que les asista razón o no; de manera que desde este punto de vista la noción de parte es puramente formal. En sentido material tienen la condición de partes los sujetos de la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del reconocimiento, así no intervengan en el proceso.

En este caso se itera, como se ha visto, se encuentra demostrado el interés legítimo que le asiste a los señores Gustavo Antonio Colorado Corrales y Sabarain Cruz Bañol para impetrar esta acción, al considerarse que pertenecían a la Asociación anteriormente constituida, ello quiere decir que esta demostrada la relación procesal, entre ellos como demandantes y la hoy denominada Organización Campesina de Riosucio, Caldas.

El Artículo **1742 del C.C** refiere que puede demandar quien tenga un interés legítimo, figura que no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí mismo, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídicamente tutelado, aunque no hace de un derecho subjetivo reflejo individual.

Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual y colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada., aspecto que ha sido referenciado por los demandantes, pues se itera, fueron parte de la anterior sociedad que protege los interés colectivos de los campesinos de la municipalidad.

En interés legítimo, cobra gran relevancia constitucional, para efectos del juicio de amparo, a la vez de ser un componente fundamental conducente a la prosecución de las acciones colectivas, adicional a ello, al hablar de esta figura, se incluye a todos aquellos que sean compatibles con el interés público lesionado o desatendido por la Administración, por ende, no puede la entidad codemandada desconocer que antes del cambio de asociación, los aquí demandantes figuraron como parte de dicha colectividad, y ello los faculta, para hoy impetrar la demanda, cabe agregar que dada la finalidad garantista y de acceso a la justicia que ahora caracteriza al interés legítimo, resulta preferente su aplicación en el tramite adelantado.

Con esta decisión se advierte, no se esta pretermitiendo etapas procesales, como erradamente lo interpreta el recurrente, pues las pruebas debidamente

recaudadas al interior del proceso deberán ser analizadas en el momento oportuno, y no para decidir la excepción previa.

Conforme a lo antes referenciado, considera esta judicatura que no es procedente reponer para revocar la decisión adoptada mediante providencia del 15 de febrero de 2023 que negó la excepción previa de falta de Inexistencia del demandante.

Respecto del recurso de apelación impetrado en subsidio se negará, en atención a que las providencias que cuentan con dicha alzada se enmarcan en el artículo 321 del C.G.P y esta decisión no encuadra en ninguna de ellas.

Por lo expuesto, el **Juzgado Civil del Circuito de Riosucio (Caldas)**,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER la providencia del 15 de febrero de 2023, por medio del cual se negó la excepción de *“Inexistencia del demandante y no haberse presentado prueba de la calidad en que actúan los demandantes”* propuesta por la parte demandada, dentro del proceso verbal de mayor cuantía de Nulidad de Escrituras de Compraventa promovido por Sabarain Cruz Bañol y Gustavo Antonio Colorado Corrales

SEGUNDO: NEGAR, el recurso de apelación impetrado de manera subsidiaria, en atención a los argumentos expuesto anteriormente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño

Firmado Por:

Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **29c7ff8dd3fd30a3881d5bbc4926a4ab31698006d0cdc57ba700ec5b16daa11c**

Documento generado en 10/04/2023 12:14:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Proceso: Acción popular
Accionante: Personero Municipal de Supía, Caldas
Coadyuvancia: Mario Restrepo y otro
Accionado: Salud total EPS y otros

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 10 de abril de 2023

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que el 31 de marzo de 2023, feneció el término para impugnar el fallo dado que la notificación se adelantó de manera electrónica, en tiempo oportuno las entidades accionadas y los coadyuvantes interpusieron recurso.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio Caldas, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad. 2022-00151-00

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede y por haberse presentado el recurso dentro del término concedido para ello, en el efecto **suspensivo** -art. 37 de la Ley 472 de 1998 y art. 323 del C.G.P.- y ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, se **concede** el recurso de apelación formulado por Salud Total EPS-S S.A, los coadyuvantes, y la Superintendencia Nacional de Salud proferida el día 06 de marzo del presente año, y adicionada mediante sentencia complementaria del 21 de marzo de 2023, en la acción popular promovida por **el Personero Municipal de Supía, Caldas.**, coadyuvado por **Mario Restrepo y Sebastián Ramírez** en contra **Salud Total EPS S-A.**

En firme este proveído, envíese el expediente digital a la superioridad para los fines del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **24664118b7906119d6ec2f235394a973edb225773f5e5a8b2cd257df28642519**

Documento generado en 10/04/2023 03:25:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Proceso: Declarativo Especial de Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otros
Demandado: José Jesús Cárdenas

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 10 de abril de 2023

Le informo a la señora juez que, el día 31 de marzo del año en curso, venció en silencio el término de tres (3) días para que la señora Isabel Cristina Cárdenas contestará la demanda.

También le informo, que se encuentra pendiente correr traslado del avalúo presentado por el señor José Jesús Cárdenas.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Rad. 2023-00025-00**

Riosucio, Caldas, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Dentro del presente proceso Declarativo Especial de Expropiación adelantando por **La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)** contra **José Jesús Cárdenas, Isabel Cristina Cárdenas, Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol, Interconexión Eléctrica S.A ISA, Central Hidroeléctrica de Caldas S.A ESP, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S, Bancolombia S.A** se allega por parte del codemandado José Jesús Cárdenas dictamen pericial realizado por la perito Luz Stella Betancur Tabares vinculada a la Corporación Colegio Nacional de Avaluadores, se ordena incorporarlo al proceso y se corre traslado a las partes por el término de **tres (3) días**, para los fines indicados en el numeral 6 del artículo 399 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **37692482970eb7f3f54c9b417a3e39736f2e089773a6b7b1c9e56ede9ef6b567**

Documento generado en 10/04/2023 03:25:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 10 de abril de 2023

CONSTANCIA SECRETARIAL: Le informo a la señora juez que venció en silencio el término para reformar la demanda.

Lo anterior para los fines pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Rad. 2023-00018-00

Dentro del presente proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por la señora **Maritza Aricapa Hernández**, contra la **Cooperativa Multiactiva de Productores Paneleros de Supía, “Coimpas”**.

Por tanto, se **cita** a las partes a que concurren con o sin apoderado a la **audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio**, donde se dará estricto cumplimiento a las previsiones del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, a celebrarse a partir de las **nueve de la mañana (09:00 a.m.) del día miércoles (03) de mayo de dos mil veintitrés (2023).**

En dicha oportunidad se decretarán las pruebas que, al hacer el examen de las mismas, sean necesarias y pertinentes para la resolución del conflicto, y fijará fecha para practicar las decretadas, escuchar alegatos y dictar la sentencia correspondiente, conforme las previsiones del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Advertencia: La inasistencia injustificada a este acto tanto de las partes como de sus apoderados, tendrá las consecuencias contempladas en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la salud de los servidores y ciudadanos, así como, el acceso a la administración de justicia, este despacho

viene adelantado todas las audiencias de manera virtual, en tal sentido la misma se efectuará a través de la plataforma **TEAM OFFICE 365**.

Se advierte que conforme al artículo 3 de la ley 2213 de 2022, es deber de los sujetos procesales realizar las actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de los medios tecnológicos dispuestos para tal fin, en consecuencia, se requiere a los apoderado y las partes, para que dentro del término de **tres (03) días**, siguientes a la notificación de esta providencia, **si no lo han hecho**, informen las cuentas de correo electrónico para la conexión a través de la plataforma mencionada, se recomienda conectarse con 10 minutos de antelación, con el fin de verificar la conexión a internet y dar inicio a la diligencia en la hora debidamente programada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:

Ruth Del Socorro Morales Patiño

Juez

Juzgado De Circuito

Civil

Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0560e14997eb1d4bbdbc7191f63167e5dcbc854d36297ee3c55a07b3d43affbd**

Documento generado en 10/04/2023 03:25:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>